DOS MINUTOS DE DOCTRINA

21 de julio de 2015

¿PUEDE EL SECRETO PROFESIONAL OCULTAR UN DELITO?

Si alguien obligado a guardar secreto sobre lo que se le confía, ¿qué actitud debe tomar ante la confesión de un delito? Una historia triste da la respuesta.

Y recuerde el lector: si Kafka fuera argentino, sería un escritor costumbrista.

Paula es una inmigrante paraguaya, llegada a la Argentina para ganarse la vida como empleada doméstica. La vida seguramente no le ha sido fácil.

Paula se radicó en la Provincia de San Juan. En algún momento fue víctima de una violación, como resultado de la cual se convirtió en madre de una niña (a la que llamaremos, apropiadamente, Dolores). Sin otros recursos a su alcance, a través de su empleadora conoció a Rodrigo, cuñado de ésta, y cuando Dolores tenía apenas tres días de vida, la puso a su cuidado.

Rodrigo y Paula decidieron también inscribir a Dolores en el Registro Civil como hija de ambos. Y para asegurarse de poder ver periódicamente a su hija, Paula firmó con Rodrigo un convenio de visitas.

Luego de varios encuentros entre Paula y Dolores, Rodrigo impidió a la madre volver a ver a su hija a partir del 2010. Y además la amenazó: si Paula hablaba de esta historia con alguien, la haría desaparecer no solo a ella sino también a sus hermanos, pues él conocía el domicilio de su familia en el Paraguay.

Paula, seguramente desesperada, en abril de 2011 fue a la Defensoría de Pobres y Ausentes de San Juan para pedir asesoramiento acerca de las amenazas proferidas por Rodrigo. Allí contó esta triste historia, con lujo de detalles. Todo lo que contó Paula fue detallado en un acta.

Las desgracias continuaron: la Defensora de Pobres no tuvo mejor idea que denunciarla en la Fiscalía de Instrucción, “ante la presunción de la comisión de un delito” (supresión de estado civil y supresión de identidad de un menor) “relatado por la propia Paula en circunstancias de presentarse ante la Defensoría para solicitar asesoramiento”. Y acompañó como prueba el acta firmada por Paula.

El Fiscal pidió a la justicia penal que se investigara el delito de amenazas supuestamente cometido por Rodrigo, pero también denunció al juez “la presunta comisión del delito de supresión de identidad” que surgía de los hechos relatados por la pobre Paula.

La denuncia de la justicia de la Provincia de San Juan se radicó ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional.

La justicia federal ordenó *el procesamiento sin prisión preventiva* de Paula, por haber cometido *tres delitos*: “supresión de estado civil e identidad en concurso ideal con la falsificación de documentos y falsedad ideológica de documento público” —el documento de identidad de Dolores—.

A las amenazas de Rodrigo, se sumaron entonces las amenazas de un aparato judicial frío, distante y mecánico. ¿Cómo habrá impactado todo esto en el ánimo de Paula?

Pero he aquí que el Defensor Oficial apeló la medida. Entonces la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal analizó la cuestión¹.

Se preguntó si era legítima una investigación llevada a cabo a partir del contenido de la denuncia efectuada por la Defensora de Pobres, *cuando el hecho le fue comunicado en el marco de una solicitud de asesoramiento legal*.

La defensa de Paula no introdujo este argumento, sino que lo hizo la propia Cámara *en razón de que podrían estar conculcados principios que comprometen el orden público y garantías fundamentales del Estado de derecho*.

Para quienes siguen estas líneas, la decisión de apelar y la iniciativa de la Cámara de analizar la posible violación del estado de derecho constituyen las primeras buenas noticias a favor de Paula, víctima inocente de la rigidez conceptual que a veces impregna las decisiones judiciales.

La Cámara dejó en claro que cuanto había narrado Paula (una historia triste y lamentablemente muy frecuente) *se encontraba bajo el amparo del secreto*

¹ In re “M.O.P. s. procesamiento”, CNFCrimyCorrec, II (2015); LL 20 julio 2015; AR/JUR/7022/2015

profesional, en la medida que tuvieron como objetivo informar sobre el contexto en el que se enmarcaban las amenazas de Rodrigo.

Paula había solicitado ayuda legal a la defensora oficial; por consiguiente, *sus dichos estaban abarcados por el deber de confidencialidad propio del abogado defensor*.

“En materia del ejercicio profesional de la abogacía —dijo la Cámara— *el secreto de la información brindada por el cliente al profesional es uno de los ejes en el que se construye la relación entre ambos*. El secreto profesional implica una forma de asegurar, proteger y no revelar la información que se ha obtenido a través de una relación de confianza. Su fundamento se encuentra en la necesidad de compartir voluntariamente situaciones propias en un marco de intimidad y de confidencialidad.”

“La defensa ante una acusación criminal difícilmente se pueda hacer sin un abogado, y para que éste pueda defender con provecho, es necesario que obtenga de su defendido las confesiones más ingenuas, pero...¿cómo puede abrir su corazón al defensor, si no lo anima la seguridad de que las leyes le impiden que éste lo traicione revelando su secreto?” *¡Y pensar que Paula no fue a confesar un crimen, sino a pedir auxilio ante las amenazas que recibía!*

“El deber de confidencialita del abogado defensor *es resistente a la autoridad de los magistrados*, lo que excluye la posibilidad de que se inicie un proceso criminal sobre la base de datos obtenidos merced a dicha relación profesional”.

La Cámara fue de la opinión que, cuando la Defensora de Pobres hizo su presentación ante la justicia en defensa de los intereses

de Paula, *debió extremar los recaudos par no incluir datos que pudieran perjudicar la situación de su asistida, captando lo sustancial de la entrevista —las amenazas de Rodrigo— sin revelar su relato textual mediante la incorporación del acta extrajudicial.*”

“La inclusión en la denuncia de la totalidad del relato [de Paula] volcado en el acta resultó a todas luces impropcedente.”

La información que la Defensora de Pobres puso en conocimiento de la justicia fue conocida por esa funcionaria *en el marco de su desempeño como defensora oficial y le fue brindada en el ámbito protegido de una solicitud de asesoramiento (consulta profesional).*

La Cámara, molesta, dijo que esto “debió ser advertido por los jueces a quienes se les planteó la cuestión, *que no debieron dar curso a una denuncia respecto de un hecho a cuyo contenido se accedió como resultado de una consulta profesional amparada por el secreto*”. No se trató, agregamos nosotros, de una minucia procesal, sino, como dijo el tribunal, *de una garantía fundamental del estado de derecho.*

“Las circunstancias referidas —agregaron los jueces— comprometen *seriamente* la legitimidad de esta causa penal”. Por eso, la declararon nula: “una solución distinta importaría lisa y llanamente convalidar que se utilice, indirecta e ilegalmente, *por vía*

de la violación de secretos, volcados en un ámbito de protección, la “confesión” de un delito” sin que al respecto se hayan cumplido las formas en que la ley procesal reglamenta las garantías constitucionales.

Por eso, “admitir como denuncia válida un acto violatorio del deber de confidencialidad importa un hecho contrario al espíritu de la ley y, por ello, incapaz de constituir un antecedente de una investigación valedera”.

La Cámara entonces declaró nulos todos los actos y diligencias procesales ocurridos a partir de la denuncia ilegítima “porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo a las garantías otorgadas por la Constitución” y sobreyó a Paula, “declarando que el proceso no afecta su buen nombre y honor”.

También ordenó que la sentencia fuera enviada a la justicia de San Juan “a los fines pertinentes” (¿para que aprendan?) y para conocimiento del juez de familia que, en esa provincia, interviene en otro pleito que afecta a Paula y cuya carátula lo dice todo: “Paula c. Rodrigo s. reintegro de hijo”.

Enterarnos de que existe un proceso semejante nos deja un sabor agridulce. Deseémosle a Paula que vuelva a encontrar jueces que, antes que condenarla por ser madre, la ayuden a recuperar a Dolores.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**